

C.A. de Santiago

Santiago, veinte de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Comparece don Hans Bórquez Tapia, abogado, por la parte reclamante sociedad “GEO PARKING SYSTEM CHILE SpA”, en autos sobre acción de impugnación caratulados “GEO PARKING SYSTEM CHILE SPA /ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO”, causa Rol N° 59-2022 D, e interpone recurso de reclamación en contra de sentencia definitiva de fecha 07 de septiembre de 2023 dictada por el Tribunal de Contratación Pública, la que declaró que:

1.- Se acoge la acción de impugnación, interpuesta por empresas Geo Parking System Chile SpA y Chroma Sales SpA, en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, con motivo de la licitación denominada, “Concesión para la explotación de estacionamientos controlados para la Comuna de Santiago” ID 2582-96-LR21, únicamente en aquella parte referida a la calificación del criterio Cumplimiento de Requisitos Formales de la oferta adjudicada, y se le rechaza en todo lo demás.

2.- En atención a lo expuesto en el considerando décimo segundo, el Tribunal no estima procedente disponer medidas para reestablecer el imperio del derecho.

3.- No se condena en costas a la parte demandante por no haber resultado totalmente vencida.

Solicita se revoque la sentencia y sea enmendada conforme a derecho, en términos de acoger en todas sus partes la acción de impugnación deducida, y disponer que:

1. Se declare la arbitrariedad del “Informe Comisión de Evaluación” emitido en la licitación pública denominada “Concesión para la explotación de estacionamientos controlados para la Comuna de Santiago” ID 2582-96-LR21, que declara inadmisibles a la empresa “GEO PARKING SYSTEM CHILE SpA”;

2. Se declare la arbitrariedad en que ha incurrido la Comisión de Evaluación de la Municipalidad de Santiago, al declarar inadmisibles la oferta presentada “GEO PARKING SYSTEM CHILE SpA”, y, en consecuencia, declarar que la oferta presentada por ésta es declarada admisible y debe ser



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TRFXXKHXEJN

sometida nuevamente al proceso de evaluación técnica por la referida Comisión de Evaluación;

3. Se declare la arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N° 1665/2022 de 16 de marzo de 2022, por fundarse en un acto arbitrario, consistente en el “Informe Comisión de Evaluación”, ordenando a la Ilustre Municipalidad de Santiago reestablecer el imperio del derecho, dictando un acto administrativo que deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1665/2022, de fecha 16 de marzo de 2022 y el “Informe Comisión de Evaluación” y, proceder a retrotraer el proceso de licitación pública al estado de realizar una nueva evaluación por integrantes de dicha comisión que no se encuentren inhabilitados, y particularmente, evaluar la oferta presentada por “GEO PARKING SYSTEM CHILE SpA”;

4. En subsidio, para el improbable evento que se desestime lo pedido anteriormente, se declare el derecho de “GEO PARKING SYSTEM CHILE SpA”, de entablar en la sede respectiva las acciones jurisdiccionales indemnizatorias y administrativas pertinentes; y,

5. En el caso de ser acogido el recurso de reclamación, se condene expresamente en costas a la Ilustre Municipalidad de Santiago; y,

6. Las demás declaraciones que resulten pertinentes y conformes a derecho.

Sostiene que de una atenta lectura de la sentencia que se reclama, es claro y evidente que la misma, centra sus razones y/o motivos en los considerandos sexto y séptimo, cuyos basamentos dan cuenta de una arbitrariedad por parte de la Ilustre Municipalidad, al declarar inadmisibles la oferta de la recurrente Geo Parking System Chile SpA.

Indica que la consecuencia de haber convalidado este actuar arbitrario, es que, cometido este acto, el afectado Geo Parking System Chile SpA, se vio privado del legítimo ejercicio de los mismos derechos que tuvieron los otros oferentes en el proceso de licitación pública, objeto de la presente acción de reclamación.

Refiere que la sentencia no considera la totalidad de las probanzas rendidas. En conclusión, si bien la demostración técnica, el día y hora señalado, no se practicó en la forma prevista por las Bases, resulta del todo arbitrario excluir, como lo señala la acción de impugnación, la mejor oferta para el patrimonio edilicio, declarando inadmisibles la oferta de la reclamante,



por exclusiva responsabilidad de un tercero, quién, ofreciendo diversas alternativas a la Ilustre Municipalidad de Santiago, en el momento de la demostración, se mostró intransigente, limitándose a señalar que se podría subsanar el “imprevisto” mediante la incorporación de la totalidad de los requisitos técnicos mínimos en el “Formulario N° 4 Propuesta Técnica, y al informe de la Demostración”, lo que, a pesar de haberse cumplido, no fue suficiente para finalmente en el informe de la Comisión Evaluadora, numeral 3, se declaró inadmisibile la oferta presentada por “GEO SYSTEM PARKING CHILE SpA”.

Añade que todos los oferentes presentaron el mismo Hardware, por lo que, no existe motivo ni razón para estimar que la reclamante no estuvo ni estaba en condiciones de cumplir los requisitos mínimos, recayendo toda la responsabilidad en el prestador del servicio, quién in situ, dio cuenta de un problema técnico informático a la Ilustre Municipalidad de Santiago, más no una imposibilidad de cumplir los requerimientos de las bases técnicas, siendo arbitrario que, el Honorable Tribunal de Contratación Pública, quite o reste credibilidad al testimonio de la testigo presencial de la demostración técnica, aseverando que no consta que haya acudido a ella, pero tampoco existe prueba de contrario, por lo que debe regir el principio de buena fe procesal que impera en todo procedimiento, más aún, si dicho testimonio, previo juramento acarrea sanciones penales por el delito de falso testimonio.

Concluye que el actuar de la recurrida, se constituye como una abierta transgresión de la doctrina de los actos propios, mediante la cual se entiende como obligación respetar y reconocer los efectos de las situaciones jurídicas y creadas por el mismo sujeto que después las reclama.

Estima que dicha transgresión se visualiza prístinamente en el simple hecho de que no resulta posible que ante las mismas condiciones técnicas de Hardware, se obtengan resultados diferentes como ocurrió en la especie; más aún si se considera que “GEO PARKING SYSTEM CHILE SpA”, tras haber acompañado el “Formulario N° 4 Propuesta Técnica” y haber concurrido a la demostración, donde dio cuenta de un problema técnico del prestador del servicio, generó confianza legítima de que su oferta y documentación se encontraban en regla y sin discordancia alguna con las bases técnicas de licitación..



Afirma que con el actuar de la Comisión Evaluadora, en orden a declarar inadmisibile la oferta y adjudicar la concesión al oferente Ingeniería en Electrónica Computación y Medicina S.A., se ha vulnerado abiertamente lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 19.886 y 41 del Reglamento de la Ley, en orden a que debe adjudicarse la concesión a aquel oferente que en su conjunto haga la propuesta más ventajosa para la entidad licitante, vulnerándose con ello el principio de cautela del patrimonio público y el principio de eficiencia y eficacia.

Finalmente, señala que si se revisan las ofertas presentadas en la licitación se deberá necesariamente llegar a la conclusión de que la oferta presentada por “GEO PARKING SYSTEM CHILE SpA”, resulta ser la oferta más ventajosa y con la cual el Municipio de Santiago resguarda el patrimonio municipal y lo administra en forma eficiente y eficaz, puesto que si sólo se mirara la oferta económica y se comparara la de las tres empresas participantes, la reclamante obtiene una ventaja considerable que la hace meritoria de ser adjudicada.

Segundo: Que según estatuye, en lo que interesa, el artículo 24 de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, *“El Tribunal (de Contratación Pública) será competente para conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos regidos por esta ley. La acción de impugnación procede contra cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, ambos inclusive”.*

Por su parte, el artículo 26 prevé, en lo pertinente: *“En la sentencia definitiva, el Tribunal se pronunciar sobre la legalidad o arbitrariedad del acto u omisión impugnado y ordenar, en su caso, las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho. La sentencia definitiva se notificará por cédula. La parte agraviada con esta resolución podrá, dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde su notificación, deducir ante el Tribunal recurso de reclamación, el que será conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago. La reclamación se concederá en el solo efecto devolutivo.”*



Tercero: Que, para resolver, se debe tener presente que la licitación pública ha sido definida como un procedimiento de tipo administrativo anterior a una contratación, a través del cual la Administración Pública selecciona, de entre varias ofertas, la que mejor atienda al interés público con el fin de estipular a continuación un contrato con la propuesta que resulte más ventajosa, sujetándose a las bases elaboradas por el órgano público. Estas últimas constituyen el conjunto de cláusulas formuladas unilateralmente por el licitante que regirán el contrato y que regularán la relación jurídica que surgirá entre las partes, incluyendo las etapas previas a su celebración, cuyas bases administrativas contendrán de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consultas y aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación y demás aspectos administrativos del proceso. Así, se ha señalado (Dictamen N° 15.909 de 2014, de la Contraloría General de la República) que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 19.886 y 2 N° 21 de su Reglamento la licitación pública es *“el procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas formulen propuestas, de entre las cuales seleccionaran y aceptara la más conveniente”* (Zúñiga, F., Gajardo, I. y Trejo, F, *Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos de suministros y prestación de servicios. Jurisprudencia judicial y Administrativa*, 2° Edición, Thomson Reuters, Santiago, 2017, página 61 y siguientes). En consecuencia, las diversas normas que integran las bases de una licitación deben ser estrictamente observadas por la Administración, pues ellas se caracterizan por conferir garantías a las personas que van a contratar con esta última, emanando de ellas consecuencias jurídicas que se traducen en derechos y deberes de las partes interesadas.

Cuarto: Que, asentadas las ideas anteriores, atendidos los contornos de la *litis*, se debe precisar que la ley exige que los actos administrativos sean motivados. En relación a esta exigencia, se debe precisar que en doctrina se distingue entre el ejercicio de facultades regladas y facultades discrecionales, en las primeras toda la actuación previa al nacimiento de un determinado acto administrativo se encuentra prevista y determinada en la ley, por lo que la autoridad debe ceñirse estrictamente a ella tanto al verificar



los supuestos de hecho como en el procedimiento que determina la decisión, que está igualmente regulada en relación a la situación fáctica que la origina. En cambio, en el ejercicio de las facultades discrecionales, la Administración goza de cierto ámbito de libertad al momento de adoptar la decisión.

Quinto: Que tanto el ejercicio de la potestad reglada como la discrecional, está sujeta a los límites que determina su control por parte de la judicatura.

Al respecto señala la Corte Suprema *“no existe mayor discusión respecto del control que debe efectuarse respecto del ejercicio de la facultad reglada; sin embargo, existen discrepancias en cuanto al control que corresponde desplegar respecto del ejercicio de la potestad discrecional. En este aspecto, es efectivo que no procede que los órganos jurisdiccionales sustituyan la decisión de la administración realizando una nueva ponderación de los antecedentes que determinan la decisión; sin embargo, aquello no excluye el control respecto de los actos administrativos que tienen su origen en el ejercicio de una facultad de carácter discrecional por parte de la Administración, toda vez que estos, como todo acto administrativo, deben cumplir con las exigencias previstas en la ley, razón que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de esa naturaleza. Tal materia, puede y debe ser controlada por la judicatura en tanto exista un conflicto que ha sido puesto en su conocimiento”;*

“Que, en efecto, se debe precisar que, si bien la división doctrinaria entre actos reglados y discrecionales es correcta, lo cierto es que en la realidad no existen actos puramente discrecionales, como tampoco estrictamente reglados; sino que hay actos en que el grado de discrecionalidad otorgado por la ley a la autoridad es mayor o menor. En este aspecto, se debe enfatizar que aun cuando en apariencia se otorgue un alto grado de discrecionalidad a la Administración, siempre existen aspectos que son reglados, cuya transgresión provoca la nulidad. Interesa destacar que en los actos en que la Administración goza de mayor grado de discrecionalidad, no es ésta la que se controla por parte de los tribunales, sino que es el aspecto no discrecional el que se somete a escrutinio judicial. Justamente esa es la razón por la que se exige que el acto administrativo sea motivado, puesto que es la herramienta entregada para que el juez verifique la



existencia de los hechos y su calificación jurídica, aspectos no discrecionales de todo acto administrativo. Así, por ejemplo, cuando la ley exige la presencia de determinados motivos y la Administración invoca uno que no existe, o cuando la ley no exige un motivo determinado, pero se invoca uno inexistente, el acto es ilegal, puesto que, como se ha señalado por la doctrina, la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. Décimo cuarto: Que, en consecuencia, los órganos jurisdiccionales se encuentran facultados para realizar un control de los actos que tienen su origen en el ejercicio de facultades discrecionales, en tanto se debe verificar que exista norma que en forma expresa entregue a la Administración una amplia facultad para decidir y que los presupuestos de hecho que determinan el ejercicio de tal facultad existan, como asimismo que el fin que ha sido previsto por el ordenamiento jurídico al otorgar la facultad discrecional, se cumpla.” (Sentencia Rol N ° 8487-2018)

Sin perjuicio de lo expuesto, se debe precisar que, en el control jurisdiccional, igualmente se debe atender al principio de proporcionalidad, que es un elemento que determina *“la prohibición de exceso, que implica una relación lógica de los elementos de contexto que generan el acto (situación, decisión y finalidad), una relación de adecuación de medio y fin, lo que implica ciertamente una limitación a la extensión de la decisión en la medida que ésta sólo se puede extender mientras se dé un vínculo directo entre el hecho y la finalidad perseguida con el procedimiento. De este modo, las situaciones que se dan fuera de esa relación son desproporcionadas, es decir, manifiestamente excesivas”*. (Cordero Vega, L., *Lecciones de Derecho Administrativo*, Editorial Thomson Reuters, Segunda Edición, 2015, p. 93).

Sexto: Que, en el caso de marras, el acto administrativo que adjudica tiene un carácter mixto, toda vez que es reglado en relación no sólo a su procedimiento, sino que también en relación a las exigencias que se deben cumplir para adjudicar, las que están previstas expresamente en las Bases Administrativas y Especiales de la propuesta pública. Ahora bien, este acto también tiene un ámbito discrecional, en tanto se debe satisfacer de mejor forma el objetivo final, que es el bien común de los habitantes que hacen uso de los servicios objeto del llamado a licitación, con motivo del Informe de Evaluación emitido por la Comisión Evaluadora, de fecha 20 de enero de 2022 y del Decreto de Adjudicación N°1665, de fecha 16 de marzo de 2022,



que resolvió adjudicar el llamado a Propuesta Pública denominada “Concesión para la explotación de estacionamientos controlados para la Comuna de Santiago” ID 2582-96-LR21.

Séptimo: Que una vez sentados los presupuestos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales antes referidos, resulta ilustrador tener en consideración que durante la instancia se fijaron, como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Si el demandante cumplió con lo establecido en el punto “6.- Plataforma de estacionamientos concesionados de la I.M.S.” letra “b) Sistema de captador de datos y su demostración” de las Bases Administrativas y Técnicas de licitación.

2.- Si la adjudicataria acompañó las declaraciones de impuesto a la renta de los años 2019, 2020 y 2021 requeridos por foro inverso.

3.- Si la evaluación de la oferta de la adjudicataria, respecto al criterio Cumplimiento de requisitos formales, se ajustó a lo dispuesto en las Bases Administrativas y Técnicas de licitación y, 10 4.- Hechos y circunstancias que motivaron la dictación del Decreto Alcaldicio N°1665 de 16 de marzo de 2022 que adjudicó la licitación de autos.

Octavo: Que las Bases Administrativas, que incluyen las Bases Técnicas en el punto 6 letra a) de las Especificaciones Técnicas se especificó lo relativo al hardware, indicando: *“El equipamiento de control de estacionamiento deberá considerar como mínimo lo siguiente:”* En la letra b) se señala: *“Sistema captador de datos y su demostración. Los oferentes deberán demostrar el funcionamiento del sistema captador de datos, en la fecha, hora y lugar señalado en la ficha de la licitación, con el hardware indicado a continuación y el criterio CALIDAD DE OFERTA TÉCNICA de la pauta de evaluación. Los asistentes deberán firmar un Acta de Asistencia que será utilizada para determinar admisibilidad en la comisión de Apertura, y la Dirección de Tránsito y Transporte Público emitirá un Informe Técnico que será utilizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas para determinar la admisibilidad de las ofertas y evaluación del criterio de CALIDAD DE OFERTA TÉCNICA. Esta demostración será de carácter obligatoria y quienes no cumplan con esta demostración o no se establezca en esta que cuentan con los requisitos mínimos exigidos, no incluidos en los criterios de evaluación, serán declaradas inadmisibles.”*



Noveno: Que la exigencia que precede -los oferentes debían demostrar el funcionamiento del sistema capturador de datos- fue formulada en términos imperativos y las bases no contemplan situaciones de fallas, por caso fortuito o fuerza mayor, como tampoco la repetición de la prueba y/o demostración.

Décimo: Que, según obra en documento denominado “CHECKLIST DE EVALUACIÓN TÉCNICA”, de fecha 14 de enero de 2022, correspondiente a la oferente Geoparking System Chile SpA., se advierte que, en el Ítem 6.b. (Sistema Capturador), que, tanto en el i) Ticket de Entrada, en lo referente a “Número de Ticket”, como en el ii) Ticket de Salida, referido al Valor Neto Total del Servicio, la actora no cumplió con lo dispuesto en la letra b), “Sistema de capturador de datos y su demostración” de las Bases Administrativas y Técnicas de licitación.

Undécimo: Que en cuanto a la prueba testimonial de la demandante, los testigos se encuentran contestes en cuanto a que aquélla habría cumplido con lo dispuesto en el punto 6 letra b), “Sistema de capturador de datos y su demostración”, de las Bases Administrativas y Técnicas de licitación, asertos que fueron valorados negativamente en la instancia en razón de la prueba documental indicada con antelación, todo ello en concordancia con el pliego de condiciones que rige el concurso público objeto del presente juicio, el que en forma imperativa exigía cumplir a cabalidad con el aludido punto 6 letra b) de las Bases Técnicas, de modo que la declaración de inadmisibilidad de la oferta de la empresa Geoparking System Chile SpA., efectuada por la Comisión Evaluadora y formalizada en el Informe de Evaluación, se ajustó plenamente a las Bases Administrativas y Técnicas que rigieron la licitación, razones que implican desestimar la alegación de la recurrente, en cuanto a que habría sido injustamente marginada del concurso, no puede prosperar, motivo por el cual será rechazada.

Duodécimo: Que asimismo, la actora reclama que la adjudicada no dio cumplimiento a la exigencia hecha mediante Foro Inverso de Mercado Público, de adjuntar los Balances presentados al SII para certificar las Declaraciones de Impuesto a la Renta de los años tributarios 2019, 2020 y 2021, por cuanto no adjuntó los mencionados balances, como sí lo hicieron los otros oferentes. Añade que al no cumplir con tal exigencia, se le debió



haber ponderado con 0 puntos y no los 0,5 con los que figura en el N° 9 del Informe de la Comisión de Evaluación, de fecha 20 de enero de 2022, denominado Cumplimiento Formal de Presentación Oferta (CF) 1%.

En relación a este acápite, sin embargo, debe observarse que la alegación de la actora, en cuanto a que la adjudicada no fue correctamente evaluada respecto del cumplimiento de los requisitos formales, fue acogida por el Tribunal de Contratación Pública, precisando no obstante que, pese a lo anterior, la rectificación del puntaje asignado en nada afectaba el resultado final de la evaluación, pues la empresa adjudicada seguía quedando en el primer lugar.

Undécimo: Que el principio de estricta sujeción a las bases actúa como garantía de la igualdad de trato que debe existir en la relación entre los oferentes, motivo por el cual no admite excepciones. Este principio se encuentra reconocido por la Ley N° 19.886, el que en su artículo 10 señala que *“Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen”* conforme además con los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental -principio de legalidad-.

Por su parte, la Contraloría General de la República ha señalado que: *“Uno de los principios fundamentales de toda propuesta, es el de estricta sujeción a las bases -consagrado actualmente en el artículo 10 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios-, de modo que, en armonía con el dictamen N° 28.008 de 1995, de este Organismo Fiscalizador, en caso de producirse alguna discrepancia entre lo estipulado en el contrato y las bases de la licitación, debe estarse a lo que se establezca en estas últimas, ya que tienen preeminencia sobre aquél, por cuanto en ellas se especifica cuál es el objeto de la contratación y las condiciones del proceso de selección del contratante, además de establecerse las cláusulas y estipulaciones contractuales, razón por la cual su incumplimiento implicar, asimismo, una vulneración del principio de igualdad de los licitantes”*. (Dictamen N° 11788 del 2008)

Asimismo, la Corte Suprema ha resuelto: *“Que tratándose de una licitación o llamado a concesión pública, es sabido que debe respetarse de manera irrestricta el principio de sujeción a las bases de la licitación; siendo dable destacar que los interesados normalmente gozan de un período de*



interrelación con la autoridad a propósito de esas bases, con el objeto de dejarlas claramente establecidas” (Corte Suprema, 7 de agosto de 2002, Rol N ° 2478-2002)

Del principio de estricta sujeción a las bases, antes señalado, se deduce la igualdad de trato que la entidad licitante debe a los diferentes participantes en un procedimiento licitatorio, garantizando la igualdad de éstos frente al procedimiento de selección de la oferta más conveniente para la Administración, principio consagrado en el artículo 9° inciso segundo de la Ley N ° 18.575 que señala que *“El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato”*

Duodécimo: Que, conforme a lo establecido en el artículo 10 inciso 3° de la Ley N° 19.886, que consagra el principio de estricta sujeción a las bases, la Ilustre Municipalidad de Santiago, en el Informe de Evaluación emitido por la Comisión Evaluadora, de fecha 20 de enero de 2022 y en la dictación del Decreto de Adjudicación N°1665, de fecha 16 de marzo de 2022, que resolvió adjudicar el llamado a Propuesta Pública denominada “Concesión para la explotación de estacionamientos controlados para la Comuna de Santiago” ID 2582-96-LR21, no incurrió en un acto ilegal o arbitrario, al declarar inadmisibile la oferta de la demandante y al adjudicar la licitación objeto del presente juicio a la oferente ECM en Unión Temporal con Estacionar S.A.

Décimo sexto: Que por lo expresado, corresponde rechazar en todas sus partes el reclamo intentado, por estimar que la sentencia atacada, al resolver como lo hizo, se pronunció conforme a las normas que regulan la materia y con mérito suficiente que justifican la decisión.

Por tales consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N ° 19.886, se **RECHAZA en todas sus partes, sin costas, la reclamación** deducida por don Hans Bórquez Tapia, abogado, por la parte reclamante sociedad “GEO PARKING SYSTEM CHILE SpA”, en autos sobre acción de impugnación, caratulados “GEO PARKING SYSTEM CHILE SPA /ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO”, causa Rol N° 59-2022 D y, en consecuencia, **SE CONFIRMA** la sentencia definitiva de fecha siete de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TRFXXKHXEJN

septiembre de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Contratación Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Contencioso administrativo-607-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TRFXXKXEJN

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Eduardo Jequier L. Santiago, veinte de diciembre de dos mil veintitres.

En Santiago, a veinte de diciembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TRFXXKXEJN